(Realizado por grupo de trabajo de la Sala Penal)

TÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo Único: Principios, derechos y garantías

Artículo 1.Objeto del proceso

El proceso penal tiene por objeto determinar si se ha cometido un delito a través del **esclarecimiento de los hechos**, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen, para garantizar la justicia en la aplicación del derecho y restaurar la armonía social entre sus protagonistas y con la comunidad.

COMENTARIO: Esta disposición busca la verdad histórica o material, lo que deberá verse reflejado en la facultad que se le otorgue al Juez para poder interrogar cuando lo estime necesario y conducente en busca de dicha verdad.

Artículo 2.Juicio previo...

Artículo 3.Protección de principios, derechos y garantías

Los principios, derechos y garantías previstos por este Código serán observados en todo proceso como consecuencia del cual pueda resultar una sanción penal o cualquier otra resolución que afecte derechos. **La inobservancia de una garantía establecida en favor del imputado no podrá hacerse valer en su perjuicio.**

COMENTARIO: La redacción de la última parte del artículo que antecede y que hemos marcado con negrita, resulta obscura ya que si se trata de una garantía a favor del imputado inobservada por el juzgado, es obvio que no se puede aplicar en su perjuicio, y no se vislumbra algún caso en que pueda darse.

Artículo 4.Principios del sistema acusatorio

Artículo 5.Principio de interpretación

Las normas de este Código se interpretarán conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución del Estado, a los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Senado de la República. Serán de aplicación supletoria los principios generales del derecho, y las normas relacionadas de los Códigos Civil y Procesal Civil del Estado.

***COMENTARIO:** Respecto a la aplicación supletoria que establece este artículo habría que considerar si no se viola el principio de exacta aplicación de la ley penal. La analogía y la mayoría de razón no es aplicable en el derecho penal .

Artículo 6.Juez natural...

Artículo 7.Justicia pronta...

Artículo 8.Principio de presunción de inocencia

1. Toda persona se presume inocente, en todas las etapas del proceso, mientras no se declare su responsabilidad en

sentencia firme, conforme a las reglas establecidas en este Código. En caso de duda, se estará a lo más favorable para el imputado.

2. En la aplicación de la ley penal son inadmisibles las presunciones de culpabilidad.
3. Hasta que se dicte sentencia condenatoria, ninguna autoridad pública podrá presentar a una persona como culpable ni brindar información sobre ella en ese sentido.
4. En los casos del sustraído a la acción de la justicia, se admitirá la publicación de los datos indispensables para su aprehensión por orden judicial.

COMENTARIO: En el caso de la duda prevista en el primer párrafo este artículo, se advierte que la duda ya no es privativa de la emisión de la sentencia en la que se establecía que en caso de duda debía absolverse, toda vez que parece abarcar inclusive para otra etapas del proceso, e inclusive para la valoración de la prueba, en la que si se tiene duda respecto de una probanza que le es adversa al inculpado, bien podría negársele valor probatorio en atención a este dispositivo, que establece que en caso de duda se estará a lo más favorable al reo.

Artículo 9.Principio de publicidad...

Artículo 10.Derecho de libertad...

Artículo 11.Dignidad de la persona...

Artículo 12.Derecho a la defensa

1. La defensa es un derecho en toda etapa del proceso. Corresponde al ministerio público y a los jueces garantizarla sin preferencias ni desigualdades.
2. Con las excepciones previstas en este Código, el imputado tendrá derecho a intervenir en los todos los actos procesales y a formular las peticiones y observaciones que considere oportunas, sin perjuicio de que la autoridad competente ejerza el poder disciplinario, cuando se perjudique el curso normal del proceso.
3. Toda autoridad que intervenga en los actos iniciales de investigación deberá velar porque el imputado conozca inmediatamente los derechos que, en esa condición, prevén la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado y los tratados internacionales.

Artículo 13. Defensa técnica

1. Desde el momento en que sea detenido o que se apersona en la investigación tendrá derecho a estar asistido por un abogado defensor y a ser informado de los hechos que se imputan y los derechos que le asisten.
2. Se comprende como elementos esenciales del derecho a la defensa, el derecho del imputado de contar con la asistencia adecuada de un abogado defensor; comunicarse libremente y privadamente con su defensor; tener acceso a los registros de la investigación; consultar dichos registros y disponer del tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa. Para tales efectos, podrá elegir a un abogado defensor de su confianza; de no hacerlo, se le asignará un abogado como defensor público.

3. El derecho a la defensa adecuada es irrenunciable y su violación producirá la nulidad absoluta de las actuaciones a partir del momento en que se realice.
4. Los derechos del imputado podrán ser ejercidos directamente por el abogado defensor, salvo aquellos de carácter personal o cuando exista una reserva expresa en la ley o en el mandato. Asimismo, para renunciar a derechos disponibles, el defensor deberá contar con el consentimiento expreso de su defendido.
5. Los miembros de pueblos o comunidades indígenas a quienes se impute la comisión de un delito tendrán derecho a contar con un abogado defensor que tenga conocimiento de su lengua y cultura.

COMENTARIO: Respecto párrafo quinto de este artículo habría que precisar que es lo que procede en el caso de que no se cuente con un abogado defensor que tenga conocimiento de su lengua y cultura. También se considera mucha exigencia, que además de que el abogado deba conocer su idioma también se requiera que conozca su cultura, es decir, las costumbres y tradiciones de un pueblo determinado, ya que esto podría determinarse mediante peritajes o testimonios emitidos por gente de la comunidad o núcleo de que se trate.

Artículo 14. Imparcialidad y deber de resolver...

Artículo 15. Independencia judicial...

Artículo 16.Fundamentación y motivación...

Artículo 17.Inmediación...

Artículo 18.Derecho a la intimidad y a la privacidad...

Artículo 19.Derecho de igualdad ante la ley...

Artículo 20.Efecto excluyente de la cosa juzgada...

Artículo 21.Licitud probatoria..

Artículo 22.Deber de protección...

Artículo 23.Justicia restaurativa...

TÍTULO SEGUNDO: JURISDICCIÓN

Capítulo I: Jurisdicción y competencia

Artículo 24.Jurisdicción penal

Artículo 25.Extensión

Artículo 26.Prevalencia del criterio jurisdiccional

Artículo 27.Obligatoriedad...

Artículo 28.Carácter improrrogable

Artículo 29.Reglas de competencia

Artículo 30.Competencia por razón de seguridad

Artículo 31.Incompetencia

Artículo 32.Efectos

Capítulo II: Conexidad

Artículo 33.Casos de conexidad

Artículo 34.Competencia en causas conexas

Artículo 35.Acumulación material

Artículo 36.Reglas de acumulación

1. Si en relación con el mismo objeto procesal que motivó la acusación a varios imputados, se han formulado varias acusaciones, el tribunal podrá ordenar, aún de oficio, la realización de un único juicio, siempre que ello no ocasione retardos procesales.

2. Si la acusación se refiere a varios hechos punibles, el tribunal podrá disponer que el debate se celebre en audiencias públicas sucesivas y continuas, para cada uno de los hechos, siempre que ello no afecte el derecho de defensa. En este caso, el tribunal podrá resolver sobre la culpabilidad al finalizar cada audiencia, y fijará la pena correspondiente a todos los casos después de celebrar la audiencia final.

COMENTARIO: En cuanto al primer párrafo resulta confuso el término “objeto procesal” que al parecer significa “hechos” acusados, pues es el objeto del proceso es hacer vigente el derecho penal sustantivo.

Respecto al segundo párrafo, es omisión en precisar si los varios hechos punibles a que se refiere son imputados a varios inculpados, surgiendo así incertidumbre, pues en el punto uno sí hace referencia a varios imputados.

Artículo 37. Término para la acumulación

Capítulo III: Excusas y recusaciones

Artículo 38. Causas de excusa

Artículo 39. Trámite de excusa

Artículo 40. Recusación

Artículo 41. Tiempo y forma de recusar

Artículo 42. Trámite de recusación

Artículo 43. Efecto sobre los actos

Artículo 44.Responsabilidad

Capítulo IV: Formalidades

Artículo 45.Idioma

Artículo 46.Declaraciones e interrogatorios con intérpretes y traductores.

Artículo 47.Lugar

1. El juez o el tribunal celebrarán las audiencias, vistas, debates y demás actos procesales en la Sala de Audiencias de la circunscripción territorial en la que es competente, excepto si ello puede provocar una grave alteración del orden público, no garantiza la defensa de alguno de los intereses comprometidos en el juicio u obstaculiza seriamente su realización.
2. Sin embargo, podrán constituirse en cualquier lugar del territorio nacional, previo aviso al superior jerárquico, cuando estimen indispensable conocer directamente elementos probatorios decisivos en una causa bajo su conocimiento y competencia.

COMENTARIO: En relación al segundo párrafo, es impreciso pues no establece bajo que circunstancias y condiciones el juez deberá conocer directamente elementos probatorios relativos a una causa de su competencia.

Artículo 48.Tiempo

Artículo 49.Protesta

Cuando se requiera la prestación de protesta, el declarante prometerá decir la verdad en todo cuanto sepa y se le pregunte, después de instruirlo sobre las penas con que la ley reprime el falso testimonio.

COMENTARIO: El término “declarante” parece abarcar a toda persona que rinda declaración en el juicio, incluso el imputado, lo que es incorrecto ya que iría contra el principio de no autoincriminación, al pretender penarlo por falsedad en declaraciones judiciales. Valdría la pena precisar si el inculcado también va a rendir protesta después de instruirlo acerca de la penas en que incurría en caso de declarar falsamente.

Artículo 50. Oralidad y registro de los actos procesales

1. Salvo casos de excepción, el proceso se desarrollará a través de audiencias o actuaciones orales.
2. Cuando un acto procesal pueda realizarse por escrito u oralmente, se preferirá, cuando ello no conlleve atraso a la sustanciación del proceso, realizarlo oralmente. Para ello las peticiones que pueden esperar a la celebración de una audiencia oral, se presentarán y resolverán en ella. Cuando sean presentadas en las audiencias en ellas se resolverán.
3. Los jueces no podrán suspender las audiencias para que se presenten por escrito las peticiones de las partes.
4. Los actos se podrán documentar por escrito, por imágenes o sonidos. Cuando se pueda optar por la

grabación de imágenes y sonidos, la diligencia se preservará de esa forma.

5. Las audiencias se registrarán en videograbación, audiograbación o cualquier medio apto a juicio del juez, para producir seguridad en las actuaciones e información que permitan garantizar su fidelidad, integridad, conservación, reproducción de su contenido y acceso a las mismas, a quienes de acuerdo a la ley tuvieren derecho a ello.
6. Las partes y las autoridades que legalmente lo requieran podrán solicitar copia e informes de los registros.

COMENTARIO: El párrafo sexto no precisa si las copias se proporcionarán gratuitamente o a costa del solicitante o que procede al respecto, esto es, en que términos..

Artículo 51.Resguardos

Capítulo V: Actas

Artículo 52.Regla general

2. El acta será firmada por quien practique el acto y, si se estima necesario, por los que invinieron en él, previa lectura. Si alguien no sabe firmar, podrá hacerlo, en su lugar, otra persona, a su ruego.

COMENTARIO: Se advierte que en este caso, no se prevé la posibilidad imprimir la huella digital del que no sabe firmar, qué procede.

Artículo 53.Nulidad

Artículo 54.Reemplazo

1. El acta o podrá ser reemplazada, total o parcialmente, por otra forma de registro, salvo disposición expresa en contrario.
2. En ese caso, quien preside el acto determinará el resguardo conveniente para garantizar la inalterabilidad y la individualización futura.

COMENTARIO: Respecto al primer párrafo se advierte un error en su redacción en la frase “El acta o podrá”, pues al parecer se pretendió escribir “El acta no podrá”.

Capítulo VI: Actos y resoluciones judiciales

Artículo 55.Poder coercitivo

Artículo 56.Restablecimiento de las cosas

En cualquier estado de la causa y a solicitud de la víctima, el juez o el tribunal podrá ordenar, como medida provisional, el restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho, siempre que haya suficientes elementos para decidirlo.

COMENTARIO: Se considera inadecuado el texto de este artículo, ya que si bien es cierto que la víctima tiene derecho a la reparación del daño, se considera sumamente difícil restablecer las cosas al estado en

que se encontraban antes del hecho; lo que resulta factible es que el juez ordene que sea garantizada la reparación del daño a petición de la víctima.

Artículo 57. Resoluciones judiciales

Artículo 58. Fundamentación y motivación de autos y sentencias

1. Las sentencias contendrán los antecedentes del caso, una relación de los hechos probados, su fundamentación fáctica, jurídica y probatoria a la luz de la sana crítica, las reglas de la lógica y la experiencia.
2. Las sentencias deberán ser redactadas de forma clara y circunstanciada en modo, tiempo y lugar, con la indicación del valor otorgado a los medios de prueba desahogados durante la audiencia oral. También se expresará el modo como se interpretan las normas al caso concreto, y las razones y criterios jurídicos que revisten importancia, sin dejar de analizar los argumentos de las partes y la parte dispositiva.
3. Los autos contendrán, en un considerando único, una sucinta descripción de los hechos o situaciones a resolver y la debida consideración y la fundamentación fáctica, jurídica y probatoria de los mismos.
4. Los autos y las sentencias sin la debida fundamentación serán nulos.

COMENTARIO: En relación al segundo párrafo en la parte que dice: “con la indicación del valor otorgado a los medios de prueba desahogados durante la

audiencia oral”, omite considerar que también deberá valorarse, en su caso, la prueba anticipada y que en el caso de delincuencia organizada se pueden ofrecer pruebas ya valoradas por el juez de control por no existir otros medios probatorios .

Artículo 59.Plazos

Artículo 60.Errores materiales

Los jueces y tribunales podrán corregir, en cualquier momento, de oficio o a solicitud de parte, los errores puramente materiales contenidos en sus actuaciones o resoluciones.

COMENTARIO: Falta esclarecer que se entiende por el concepto “errores puramente materiales”.

Artículo 61.Aclaración y adición

Artículo 62.Resolución firme

Artículo 63.Copia auténtica

Artículo 64.Restitución y renovación

Artículo 65.Copias, informes y certificaciones

Capítulo VII: Comunicación entre autoridades

Artículo 66.Reglas generales

Artículo 67.Exhortos a autoridades extranjeras

Artículo 68.Exhortos de otras jurisdicciones

Artículo 69.Retardo o rechazo

Capítulo VIII: Notificaciones y citaciones

Artículo 70.Notificaciones

Artículo 71.Regla general sobre notificaciones

Las resoluciones deberán notificarse a quien corresponda, dentro de las veinticuatro horas después de ser dictadas, salvo que el juez o tribunal disponga un plazo menor. No obligarán sino a las personas debidamente notificadas. Se tendrán por notificadas las personas que se presenten a la audiencia.

COMENTARIO: El término de 24 horas se considera muy poco para los casos en que la notificación tenga que hacerse fuera del lugar donde se lleva el procedimiento penal, quizás deba duplicarse para estos casos, quedando de la manera siguiente: “Las resoluciones deberán notificarse a quien corresponda, dentro de las veinticuatro horas después de ser dictadas, si la notificación es en la localidad donde se sigue el procedimiento, en caso contrario, en 48 horas, salvo que el juez o tribunal disponga un plazo menor o mayor”.

Artículo 72.Notificador

Artículo 73.Lugar para notificaciones

Artículo 74.Notificaciones a defensores o a mandatarios

Artículo 75.Formas de notificación

Artículo 76.Notificación a persona ausente

Cuando la persona por notificar no sea encontrada en el lugar, la copia será entregada a alguna persona mayor de edad que se encuentre allí o bien a uno de sus vecinos más cercanos, quienes tendrán la obligación de identificarse y entregar la copia al interesado.

COMENTARIO: Habría que aclarar qué procedería si la persona que recibe la notificación en ausencia del interesado, no se identifica con documento alguno.

Artículo 77.Notificación por edictos

Cuando se ignore el lugar donde se encuentra la persona que deba ser notificada, la resolución se le hará saber por edictos que se publicarán tres veces con un lapso de siete días entre cada publicación, por lo menos, en dos de los diarios de circulación generalizada estatal, sin perjuicio de ordenar su publicación en un diario de circulación nacional y de la adopción de las medidas convenientes para localizarlo.

COMENTARIO: No se indica a costa de quién serán hechas las notificaciones por edictos o qué procede.

Artículo 78. Notificación por teléfono

Artículo 79. Vicios de la notificación

Artículo 80. Citación

Artículo 81. Comunicación de actuaciones del ministerio público

Capítulo IX: Plazos

Artículo 82. Reglas generales

Artículo 83. Cómputo de plazos fijados a favor de la libertad del imputado

Artículo 84. Renuncia o abreviación

Artículo 85. Plazos fijados judicialmente

Artículo 86. Reposición del plazo

Capítulo X: Nulidades

Artículo 87. Principio general sobre prueba ilícita

Artículo 88. Saneamiento de defectos formales

Artículo 89. Defectos absolutos

Artículo 90. Convalidación

Artículo 91. Declaración de nulidad

TÍTULO TERCERO: ACCIONES

Capítulo I: Acción penal

Sección 1: Ejercicio de la acción penal

Artículo 92. Ejercicio de la acción penal

Artículo 93. Acción penal pública

Artículo 94. Acción penal pública a instancia de parte

1. Cuando el ejercicio de la acción penal pública requiera instancia de parte, el ministerio público sólo la ejercerá una vez que se formule querrela, ante autoridad competente.

2. Son delitos de acción pública a instancia de parte o de querrela los siguientes:¹
 - a) Las lesiones leves o graves ocasionadas por un ascendiente o descendiente, en ambas líneas, hermano, cónyuge, concubina, concubinario, adoptante o adoptado;
 - b) El rapto;
 - c) El estupro;
 - d) El robo cometido por un ascendiente o descendiente, en ambas líneas, hermano, cónyuge, concubina, concubinario, adoptante o adoptado;
 - e) El despojo;
 - f) El abuso de confianza;
 - g) El fraude cometido por un ascendiente o descendiente, en ambas líneas, hermano, cónyuge, concubina, concubinario, adoptante o adoptado;
 - h) La administración fraudulenta cometido por un ascendiente o descendiente, en ambas líneas, hermano, cónyuge, concubina, concubinario, adoptante o adoptado;
 - i) La insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores;
 - j) Los daños en propiedad ajena;
 - k) La usura;
 - l) El encubrimiento por receptación;
 - m) La sustracción o retención de menores e incapaces;

¹ Este artículo deberá concordarse con el Código Penal de cada entidad federativa. A manera de ejemplo se utiliza el nuevo Código Procesal Penal del Estado de Morelos.

- n) El ejercicio indebido del propio derecho;
- o) Las lesiones culposas;
- p) El allanamiento de morada; y
- q) El hostigamiento sexual.

COMENTARIO: Este enlistado será motivo de estudio y deberá adecuarse al Código Penal del Estado respectivo, pues la reforma constitucional si bien establece cuáles son delitos graves, también deja abierta tres áreas para establecer cuáles son delitos graves que atentan seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

2. Se requerirá igualmente de la querrela para la persecución de terceros que hubiesen incurrido en la ejecución del delito con los sujetos que se mencionan con antelación.
3. Sin embargo, antes de la instancia, podrán realizarse los actos urgentes que impidan continuar el hecho o los imprescindibles para conservar los elementos de prueba, siempre que no afecten el interés de la víctima u ofendido.
4. La víctima o su representante podrán revocar la instancia en cualquier momento hasta antes de acordarse la apertura a juicio.

COMENTARIO: Este último párrafo es oscuro, al mencionar que la víctima o su representante podrá 'revocar la instancia'.

Artículo 95. Acusador particular

Artículo 96. Acusador privado

1. Cuando este Código permite la acción privada, su ejercicio corresponde únicamente a la víctima.
2. Son delitos de acción privada²:
 - a) Los delitos contra el honor; y
 - b) La propaganda desleal.
 - c) Cualquier otro delito que la ley califique como tal.

COMENTARIO: También esta lista deberá adecuarse al Código Penal del Estado.

Artículo 97. Acusador popular

1. En los casos que este código permite, cualquier persona que demuestre interés legítimo, podrá ejercer la acción penal popular. También podrán ejercer la acusación popular en términos de este artículo el Auditor Superior del Congreso, el titular del Organismo Estatal de Derechos Humanos y los Síndicos Municipales.
2. Son delitos de acción popular:
 - a) Delitos cometidos por servidores públicos;
 - b) Delitos de lesa humanidad; y³
 - c) Delitos contra el medio ambiente y la legislación ambiental.

COMENTARIO: Deberá adecuarse a la legislación Penal de cada Estado.

² Este listado también deberá tener las características que decida el propio Estado. Es importante considerar, que este tipo de delitos excluye el ejercicio de la acción penal pública por parte del ministerio público.

³ Cada legislatura deberá revisar si tiene tipificado esta clase de delitos.

Sección 2: Criterios de oportunidad

Artículo 98. Principios de legalidad procesal y oportunidad

1. El ministerio público deberá ejercer la acción penal pública en todos los casos en que sea procedente, con arreglo a las disposiciones de la ley. No obstante, podrá prescindir, total o parcialmente, de la persecución penal, limitarla a alguna o varias infracciones o a alguna de las personas que participaron en el hecho, cuando:
 - a) Se trate de un hecho insignificante, de mínima culpabilidad del autor o del partícipe o exigua contribución de éste, salvo que afecte gravemente un interés público o lo haya cometido un servidor público en el ejercicio del cargo o con ocasión de él;
 - b) El imputado haya producido la reparación integral, a entera satisfacción de la víctima, del daño particular o social causado, en delitos de contenido patrimonial sin grave violencia sobre las personas o en delitos culposos;
 - c) El imputado haya sufrido, a consecuencia del hecho, daño físico o psíquico grave que torne desproporcionada la aplicación de una pena, o cuando en ocasión de una infracción culposa haya sufrido un daño moral de difícil superación;
 - d) Cuando la pena o medida de seguridad que pueda imponerse por el hecho o la infracción de cuya persecución se prescinde, carezca de importancia en consideración a la pena o medida de seguridad ya impuesta, o a la que se debe esperar por los restantes hechos o delitos a la misma persona, o la que se le impuso o se le impondría en un proceso tramitado en la jurisdicción federal o en el extranjero.
 - e) Se trate de asuntos de delitos graves y el imputado colabore eficazmente con la investigación, brinde información esencial para evitar que continúe el delito o se perpetren otros, ayude a esclarecer el hecho

investigado u otros conexos o proporcione información útil para probar la participación de otros imputados, siempre que la acción penal de la cual se prescinde total o parcialmente resulte considerablemente más leve que los hechos punibles cuya persecución facilita o cuya continuación evita;

- f) Cuando el imputado fuere entregado a la jurisdicción federal, por así convenir al proceso, en una causa federal, cuando la sanción a la que pudiera llevar la persecución en el Estado carezca de importancia al lado de la sanción que le hubiera sido impuesta en la jurisdicción federal; y
 - g) El imputado pueda colaborar con el ministerio público federal para esclarecer hechos relacionados con delincuencia organizada y el ministerio público del Estado considere conveniente dicha información respecto a los hechos que se investigan y atribuyen en el Estado.
2. El ministerio público debe aplicar los criterios de oportunidad y otras facultades discrecionales sobre la base de razones objetivas y valorando las pautas descritas en cada caso. En los casos en que se verifique un daño debe velar porque sea razonablemente reparado.
 3. La aplicación de un criterio de oportunidad podrá ordenarse en cualquier momento y hasta antes de dictarse el auto de apertura a juicio.

COMENTARIO: De lo anterior parece desprenderse que solamente el Ministerio Público podrá hacer uso del principio de oportunidad hasta antes de dictarse el auto de apertura a juicio. Sería pertinente que se precise si el juez de garantías puede hacer uso de oficio de este principio o cuál es su rol o qué hacer al respecto o solo es protagonista en el él la Fiscalía.

Artículo 99.Efectos del criterio de oportunidad

1. Si queda firme la aplicación de un criterio de oportunidad, y no se presenta acusación por la víctima en un plazo de

diez días, se produce la extinción de la acción penal con respecto al autor o partícipe en cuyo beneficio se dispuso.

COMENTARIO: Este párrafo es confuso en su redacción, porque si el principio de oportunidad ha quedado firme, no se entiende porque se le da dicho plazo a la víctima para que presente su acusación. En este caso, además se advierte que dicho principio se vería afectado por la intervención de la víctima.

2. Si la decisión se funda en la insignificancia del hecho, sus efectos se extienden a todos los que reúnan las mismas condiciones.

3. No obstante, en el caso de los incisos c), d), e) y h) del artículo anterior, se suspenderá el ejercicio de la acción penal pública en relación con los hechos o las personas en cuyo favor se aplicó el criterio de oportunidad. Esa suspensión se mantendrá hasta quince días después de que tenga el carácter de firme la sentencia respectiva, momento en que el tribunal deberá resolver definitivamente sobre la prescindencia de esa persecución.

COMENTARIO: Este párrafo tercero no es claro en cuanto a la suspensión del ejercicio de la acción penal y a la vez la continuación del proceso, pues tal parece que aún cuando este suspendida la acción penal se dictará sentencia. Parece ser que la continuación del proceso se refiere a otros imputados y no por aquellos en cuyo favor se dispuso la suspensión de la acción penal.

4. Si la colaboración del sujeto o la sentencia no satisfacen las expectativas por las cuales se suspendió el ejercicio de la acción, el ministerio público podrá reanudar el proceso.

Sección 3: Obstáculos para el ejercicio de la acción penal

Artículo 100. Obstáculos

Artículo 101. Excepciones

1. Durante el proceso, ante el juez o tribunal competente, en las oportunidades previstas, las partes podrán oponerse a la persecución penal por los siguientes motivos:

- a) Incompetencia o falta de jurisdicción del tribunal;
- b) Falta de acción porque ésta no pudo promoverse, no fue iniciada legalmente o no puede proseguirse; o
- c) Extinción de la acción penal.

2. El juez o tribunal competente podrá asumir de oficio la solución de alguna de las cuestiones anteriores cuando sea necesario para decidir en las oportunidades que la ley prevé, y siempre que la cuestión, por su naturaleza, no requiera instancia de parte.

COMENTARIO: Conforme a este párrafo, parece que el juez de garantías, limitado, pero si puede tener conocimiento del principio de oportunidad.

Artículo 102. Efectos

Artículo 103. Extensión jurisdiccional

Los tribunales penales están facultados para examinar las cuestiones civiles y administrativas que se presenten con motivo del conocimiento de los hechos investigados cuando ellas aparezcan tan íntimamente ligadas al hecho punible

que sea racionalmente imposible su separación; y para decidir sobre ellos con el solo efecto de determinar si el imputado ha incurrido en delito.

Artículo 104. Prejudicialidad civil

1. Si la cuestión prejudicial se refiere a una controversia sobre el estado civil de las personas, el juez acordará a la parte que la planteó, un plazo que no excederá de quince días para que acuda a tribunal civil competente y suspenderá el proceso penal hasta por el término de seis meses para la decisión de la cuestión civil.
2. Decidida la cuestión prejudicial, o vencido el plazo acordado para que la parte ocurra al tribunal civil competente sin que ésta acredite haberlo utilizado o vencido el término fijado a la duración de la suspensión sin que la cuestión prejudicial haya sido decidida, el tribunal penal revocará la suspensión y resolverá la cuestión prejudicial ateniéndose para ello a las pruebas que, según la respectiva legislación, sean admisibles.

COMENTARIO: Son cuestionables estos párrafos, ya que depende del caso en concreto, y lo mismo el término, sobre todo si se está hablando de juicios orales, creemos que se violentan los principios de celeridad y pronta impartición de justicia.

Sección 4: Extinción de la acción penal

Artículo 105. Causas de la extinción de la acción penal.

Artículo 106. Cómputo de la prescripción.

Artículo 107. Interrupción de los plazos para la prescripción

Iniciado el proceso, los plazos establecidos en el artículo anterior volverán a correr de nuevo a partir de los siguientes momentos:

Artículo 108. Suspensión del cómputo de la prescripción

Capítulo II: Reparación del daño

Artículo 109. Objeto de la reparación del daño

Artículo 110. Ejercicio

1. La reparación del daño que deba exigirse al imputado se hará valer de oficio por el ministerio público ante el Juez que conozca del proceso penal. Para tales efectos al formular la imputación inicial el ministerio público deberá solicitar el pago de los daños y perjuicios según los datos que hasta ese momento arroje la investigación.
2. Concluida la investigación, al formular la acusación, el ministerio público deberá concretar la demanda para la reparación del daño, especificando el monto completo de cada una de las partidas o rubros que comprendan la indemnización por restitución, pago material, pago del daño moral, pago por lucro por daños y pago por perjuicios ocasionados por el delito atribuido. Esta acción podrá dirigirse contra los autores del hecho punible y partícipes en él y contra el tercero civilmente responsable.
3. Cuando la prueba producida en la investigación no permita establecer en la sentencia, con certeza, el monto de los daños y perjuicios, o de las indemnizaciones correspondientes, el Tribunal podrá condenar

genéricamente a reparar los daños y los perjuicios y ordenar que se liquiden en ejecución de sentencia por vía incidental, siempre que éstos se hayan demostrado, así como su deber de repararlos.

COMENTARIO: Es recomendable considerar la posibilidad de que en materia de reparación del daño, se pueda suplir la deficiencia, sobre todo en aquéllos delitos que afectan la moral de las personas afectadas.

Artículo 111. Interés público y social

1. La reparación del daño también podrá ser exigida por el ministerio público o el acusador popular cuando se trate de hechos punibles que afecten intereses colectivos o difusos o que afecten el patrimonio del Estado.
2. En estos casos el monto de la condena será destinado a un fondo general de reparaciones a las víctimas, administrado por la Procuraduría del Estado, quien velará por su manejo y reglamentará la forma en la que estas indemnizaciones satisfagan mejor los intereses de las víctimas.

COMENTARIO: Se considera más adecuado que el fondo general de reparaciones a la víctima sea administrado por cada Poder Judicial del Estado, teniendo en cuenta que es en la impartición de justicia cuando se hara uso de los recursos a través de los jueces de ejecución de sentencia, quienes se cercioran de su debido cumplimiento, mientras en la etapa de investigación no se requieren esos recursos pues todavía no hay una sentencia firme.

Artículo 112. Participación de la víctima en la reparación del daño

1. Cuando la víctima formule la acusación particular, en ese mismo acto, podrá también coadyuvar con el ministerio público o gestionar por su cuenta, para obtener la reparación del daño.
2. En este caso la petición deberá contener además de los requisitos propios de la acusación particular los siguientes:
 - a) El nombre y domicilio del accionante y, en su caso, de su representante. Si se trata de entes colectivos, la razón, el domicilio social y el nombre de quienes lo dirigen;
 - b) El nombre y el domicilio del civilmente obligado, si existe, y su vínculo con el hecho atribuido al imputado;
 - c) Los motivos en que la acción se basa con indicación del carácter que se invoca y los daños y perjuicios cuya reparación se pretenda;
 - d) El monto de cada una de las partidas que reclama, y
 - e) La prueba en que sustenta su reclamación del daño con el fin de que sea recibida en la audiencia del juicio. Si ofrece prueba de testigos, deberá presentar una lista, individualizándolos con nombre, apellidos, oficio o profesión y domicilio o residencia, señalando, además, los puntos sobre los que habrán de recaer sus declaraciones. En el mismo escrito deberá mencionar, al perito o peritos cuya comparecencia solicita, indicando sus títulos o calidades.
3. La víctima podrá desistir expresamente de su demanda, en cualquier estado del proceso.

COMENTARIO: Se estima inapropiado utilizar el término “demanda”, pues se trata de un concepto eminentemente civil.

Artículo 113. Carácter accesorio

1. En el proceso penal, la acción para obtener la reparación del daño sólo podrá ser ejercida mientras esté pendiente la persecución penal.

2. Sobreseído o suspendido el proceso, conforme a las previsiones de la ley, el ejercicio de la acción para la reparación del daño se suspenderá hasta que la persecución penal continúe y quedará a salvo el derecho de interponer la demanda ante los tribunales competentes.

COMENTARIO: Si bien es congruente que la suspensión de un proceso pueda continuarse con posterioridad, no lo es en el supuesto de que el proceso haya sido sobreseído, ya que el efecto del sobreseimiento es de sentencia absolutoria o consecuencia de la extinción de la acción penal.

3. La sentencia absolutoria no impedirá al tribunal pronunciarse sobre la reparación del daño, cuando proceda.

Artículo 114. Ejercicio alternativo

La acción para obtener la reparación del daño podrá ejercerse en el proceso penal, conforme a las reglas establecidas por este Código o intentarse ante los tribunales civiles, pero no se podrá tramitar simultáneamente en ambas jurisdicciones.

TÍTULO CUARTO: FORMAS ANTICIPADAS DE TERMINACIÓN DEL PROCESO

Capítulo I: Suspensión condicional del proceso

Artículo 115. Procedencia

Artículo 116. Condiciones por cumplir en el proceso

Artículo 117. Conservación de los medios de prueba

Artículo 118. Revocación de la suspensión

Si el imputado se aparta, considerablemente y en forma injustificada, de las condiciones impuestas, no cumple con el plan de reparación del daño o comete un nuevo delito, el juez, a solicitud del ministerio público, de la víctima u ofendido, citará a audiencia, en la que luego de agotar el debate resolverá acerca de la reanudación de la persecución penal. En lugar de la revocación, el tribunal puede ampliar el plazo de suspensión del proceso a prueba hasta por dos años más. Esta extensión del término puede imponerse sólo por una vez.

COMENTARIO: En esta disposición no se previene qué procederá para el caso de que el imputado no asista al debate. Tampoco se entiende porqué se le tiene que ampliar el plazo de suspensión del proceso, si el inculpado injustificadamente ya incumplió con alguna de las medidas que le fue impuesta.

Artículo 119. Suspensión del plazo a prueba

Artículo 120. Efectos de la suspensión del proceso a prueba

Artículo 121. Suspensión de la prescripción

Capítulo II: Justicia restaurativa.

Artículo 122. Procedencia de los mecanismos alternativos de solución de controversias

Artículo 123. Oportunidad

1. Los acuerdos para la reparación procederán hasta antes de decretarse el auto de apertura a juicio oral.
2. En los casos previstos en el artículo anterior, si las partes no lo han propuesto con anterioridad, desde su primera

intervención el ministerio público o, en su caso, el juez de control invitará a los interesados a que lleguen a acuerdos para la reparación en los casos en que proceda y les explicará los efectos de los mecanismos alternativos de solución de controversias disponibles.

Artículo 124. Principios

Artículo 125. Especialistas en mecanismos alternativos de solución de controversias

1. Para facilitar el acuerdo de las partes, el ministerio público o el tribunal, a solicitud de las mismas, dependiendo de la etapa procesal, ordenará la intervención de un especialista en mecanismos alternativos de solución de controversias certificado en términos de la legislación correspondiente.
2. Los especialistas en mecanismos alternativos de solución de controversias deberán guardar secreto sobre lo que conozcan en las entrevistas de las partes. La información que se genere en los procedimientos respectivos no deberá ser utilizada en perjuicio de las partes dentro del proceso penal.

COMENTARIO: No se precisa si estos especialistas dependerán del Poder Judicial, del Ejecutivo o serán particulares, y si tendrán fe pública.

126.Efectos de la justicia restaurativa⁴

⁴ En la legislación complementaria a este Código sobre medios alternos de solución de controversias, las legislaturas estatales deberán estimar la conveniencia de dar a los especialistas fe pública para dar seguridad jurídica a los acuerdos celebrados ante ellos.

1. Si las partes llegaran a acuerdos se elaborará convenio por escrito, en el que se establezcan las obligaciones que se contraen, dentro de las que necesariamente debe estar la reparación del daño. El convenio deberá ser aprobado por el centro especializado en mecanismos alternativos de solución de controversias reconocido legalmente, si no se ha iniciado el procedimiento; por el ministerio público, una vez que inició éste, o por el juez de control, si ya se dictó el auto de vinculación a proceso.

2. El cumplimiento de lo acordado extingue la acción penal que será **decretada por quien haya aprobado el convenio.**

COMENTARIO: Se considera que es facultad de la autoridad que esté conociendo del asunto, decretar la extinción de la acción penal, y no de un centro especializado en mecanismos alternativos de solución de controversias, aunque esté reconocido legalmente, creemos que puede intervenir en la mediación o conciliación, pero no resolver en definitiva.

3. Si el imputado incumple las obligaciones pactadas dentro del término que fijen las partes o, en caso de no establecerlo, dentro de un año contado a partir del día siguiente de la ratificación del acuerdo ante el centro especializado en mecanismos alternativos de solución de controversias, ministerio público o juez de control, dependiendo del inicio del procedimiento o proceso, podrán presentar su denuncia o querrela o continuar con el procedimiento o proceso, según la etapa en que se encuentre.

4. La decisión de la víctima u ofendido y el imputado de acudir a los mecanismos alternativos de solución de

controversias tiene efectos vinculantes, en consecuencia, excluye el ejercicio de la acción para la reparación del daño derivada del delito.

5. El especialista en mecanismos alternativos de solución de controversias en su caso, hará del conocimiento al ministerio público o al juez de control, del resultado restaurativo y remitirá el convenio correspondiente para que determine sus efectos jurídicos.

COMENTARIO: De acuerdo con los párrafos precedentes, parece ser que el convenio celebrado para la solución de una controversia, también puede ser del conocimiento de un juez de control, luego entonces valdría la pena aclarar si es quien finalmente aprueba y ordena el cumplimiento del decreto, y en su caso, declara extinguida la acción penal.

127.Impugación ante la autoridad judicial

Cuando las partes o el ministerio público tengan motivos fundados para estimar que alguno de los intervinientes no está en condiciones de igualdad para negociar o ha actuado bajo coacción o amenaza, podrán impugnar ante el juez de control la validez del convenio.

128.Suspensión

129.Intereses difusos

TÍTULO SEXTO: SUJETOS

Capítulo I: Ministerio público

130.Funciones del ministerio público

131.Carga de la prueba

132.Objetividad y deber de lealtad

133.Formas

134.Facultades

135.Excusa y recusación

Capítulo II: La Policía

136.Función

137.Facultades y obligaciones

138.Dirección funcional

139.

140.Actuación de los cuerpos de seguridad pública

141.Formalidades

142.Restricciones policiales

1. La policía no podrá recibirle declaración al imputado.
2. En caso de que manifieste su deseo de declarar, deberá comunicar ese hecho al ministerio público para que se inicien los trámites de audiencia de vinculación y se reciban sus manifestaciones con las formalidades previstas en este Código.
3. La policía podrá entrevistar al imputado, únicamente, para constatar su identidad, cuando no esté suficientemente individualizado, previa advertencia de los derechos que lo amparan.

COMENTARIOS: El término “no podrá”, no es del todo restrictivo, quiere decir que existe la posibilidad de que agentes de la policía si podrían hacerlo, entonces volveríamos a caer en las confesiones sin valor o en

detención arbitrarias con ese propósito; en todo caso, se tendría que exponer que pasaría si se diera el caso .

Capítulo III: La Víctima

143.Víctima

144.Derechos de la víctima

145.Derechos procesales del acusador particular

146.Formalidades de la acusación por particulares

1. La acusación por particulares deberá reunir, en lo posible, los mismos requisitos de la acusación del ministerio público.
2. La víctima u ofendido en el ejercicio de la acción penal deberán actuar con el patrocinio de abogado o representante.

COMENTARIO: Qué pasaría si no se reúne en lo posible esos requisitos y qué pasaría si no actúan con patrocinio de abogado o representante.

147.Oportunidad

1. La solicitud de intervenir como acusador particular podrá ser formulada en la etapa preliminar y hasta quince días antes de la fecha fijada para celebrar la audiencia de preparación de juicio.
2. El ministerio público o el juez rechazarán la solicitud de constitución de parte acusadora particular cuando el interesado no tenga legitimación. Si el rechazo lo realiza el ministerio público, el acusador podrá acudir dentro del tercer día ante el juez para que resuelva el diferendo.

148.Desistimiento expreso

149.Desistimiento tácito

Capítulo IV: El Imputado.

150.denominación.

151.Derechos del imputado

152.Identificación

1. El imputado deberá suministrar los datos que permitan su identificación personal y mostrar su documento de identidad.
2. Si no los suministra o se estima necesario, se solicitará constancia al Registro Civil, sin perjuicio de que una oficina técnica practique su identificación física utilizando sus datos personales, impresiones digitales y señas particulares.
3. También podrá recurrirse a la identificación por testigos en la forma prescrita para los reconocimientos, o a otros medios que se consideren útiles. La duda sobre los datos obtenidos no alterará el curso del proceso y los errores referentes a ellos podrán corregirse en cualquier oportunidad, aun durante la ejecución penal. Estas medidas podrán aplicarse aun en contra de la voluntad del imputado.

CONSIDERACIÓN: No está por demás establecer la carga de la prueba al respecto, sobre todo en aquéllos casos en que se no tenga la suficiente prueba para identificar al imputado.

153.Domicilio

154.Incapacidad sobreviviente...